

B INSERCIONES

1

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO BONACINA**Opinión del señor diputado acerca del proyecto de
ley sobre fomento para la micro, pequeña y
mediana empresa****4. Distribución territorial de la actividad pyme**

La actividad manufacturera argentina se ha caracterizado históricamente por un alto grado de concentración territorial, tendencia que pese a los esfuerzos de descentralización —vía beneficios fiscales y subsidios a través de promoción industrial— se ha mantenido desde los años setenta (Gatto y otros, 1988; Yoguel y otros 1988; Roitter, 1987 y Camillo y otros, 1988). De acuerdo con los datos publicados del Censo Económico de 1994, aproximadamente el 80 por ciento de la actividad industrial (medida a través de la variable valor de la producción) se concentraba en cuatro distritos: provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba, siendo decisivo el aporte generado por el Gran Buenos Aires (55), que concentra aproximadamente la mitad de la producción total nacional.

La distribución de la actividad pyme manufacturera guarda una alta relación con el perfil territorial de la industria nacional, aunque presenta algunos rasgos distintivos. Aproximadamente el 55 por ciento de las pymes industriales está radicado en el Gran Buenos Aires, ascendiendo dicha cifra al 60 por ciento si se incluye el resto de la provincia de Buenos Aires (cuadro 1 del Anexo IV). En otras palabras, más de la mitad de las pymes manufactureras argentinas están concentradas en el cordón industrial porteño-bonaerense.

Más aún, si a los distritos de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal se agregan las jurisdicciones de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, se alcanza a más del 85 por ciento del total de las pymes; cifra que, en términos del potencial dinámico empresarial e industrial (56), sería aún mayor. A la luz de estos datos se podría argumentar que algunas jurisdicciones provinciales prácticamente carecen de estructura industrial pyme, en la medida que no conforman una masa mínima o crítica de empresas articuladas en torno de un subsector o rubro manufacturero. Si se utiliza como unidad de análisis territorial el departamento y se considera como departamento pyme a aquel en el que se hallan localizadas por los menos 40 empresas pymes, se pueden definir tres tipos de áreas (57).

A. Áreas de fuerte presencia pyme: está constituida por el Gran Buenos Aires (GIBA), donde todos los departamentos cuentan con más de 40 pymes. Esta área contiene el 55 por ciento de las

pymes, es decir, cerca de 15.000 firmas, que están ubicadas en una superficie que representa menos del 0,3 por ciento del territorio argentino.

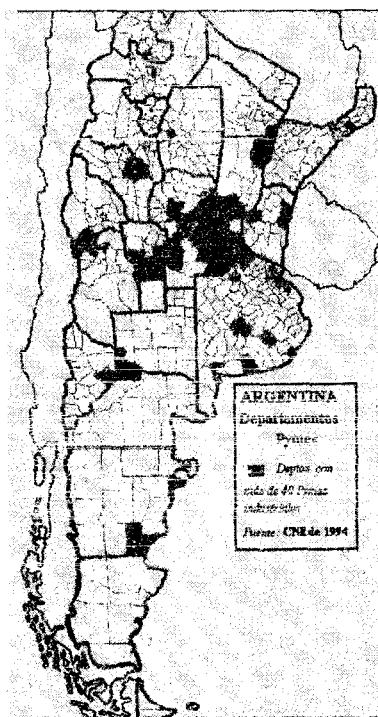
B. Áreas de presencia media: abarca a las provincias que cuentan con al menos uno de los 64 departamentos pyme existentes en el país, excluyendo al Gran Buenos Aires.

Estas jurisdicciones pueden agruparse en tres subáreas:

B1. Áreas de presencia media/alta: comprende las provincias con más de diez departamentos pyme: Santa Fe, Córdoba y el resto de la provincia de Buenos Aires. Incluyen 36 de los 64 departamentos pymes.

B2. Áreas de presencia media: corresponde a las provincias que cuentan con más de uno y menos de diez departamentos pyme. Ellas son: Mendoza (58), Entre Ríos, San Luis, Misiones, Chubut. Aquí se encuentran casi el 10 por ciento de las pymes del país en el 20 por ciento de su territorio.

B3. Áreas de presencia media/baja: incluye a aquellas provincias con un solo departamento pyme, en general (salvo Río Negro), coincidente con el departamento en el que se encuentra la Capital. Ellas son Tucumán, Salta, San Juan, Neuquén, Chaco, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Corrientes, Santiago del Estero y Río Negro. Representa el 40 por ciento del territorio argentino y contienen el 8,5 por ciento del total de los locales pymes.



C. **Áreas de presencia mínima:** comprende a las provincias en donde la presencia de pymes es ínfima y/o se halla tan dispersa que no logran agrupar 40 locales en ninguno de sus departamentos. Estas son: Formosa, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La información censal disponible no permite –por el momento– realizar un análisis de la evolución de la actividad pyme por provincia, ni tampoco examinar la dinámica de la demografía empresarial pyme de cada jurisdicción. Sin embargo, información parcial indicaría que, con excepción de las provincias que se beneficiaron con los incentivos promocionales –especialmente San Luis–, las estructuras pymes provinciales se deterioraron, tanto en densidad de firmas como en la incorporación de nuevas actividades y en la producción.

La ausencia de desarrollo empresarial pyme en vastas zonas del país queda muy evidenciada cuando se analizan las cifras a nivel de distrito o ciudad. En los cuadros 2 y 4 del Anexo IV, en el Mapa 1 y en el Anexo III se presenta distinto tipo de información al respecto. La actividad industrial pyme se encuentra en las ciudades de más de 50.000 habitantes y sólo un pequeño conjunto de ciudades de esa dimensión no alcanza a concentrar 40 establecimientos pymes. Por el contrario, en la zona sur y centro de la provincia de Santa Fe y en la zona sur y este de Córdoba se localiza un conjunto importante de empresas pymes en departamentos de mucha menor dimensión.

En términos generales, Argentina tiene un índice de empresarialidad industrial pyme –medido en relación al número de empresas pymes por cada 10.000 habitantes– (59) que está próximo a la mitad del promedio europeo; es decir que en la Unión Europea existen prácticamente el doble de pymes industriales por habitante (45-50) empresas pymes y micro manufactureras por cada 10.000 habitantes (60). En la Argentina, sólo el distrito Capital Federal alcanza dicho valor; todas las demás jurisdicciones están por debajo de esa magnitud relativa.

En el grupo de jurisdicciones que se acerca o supera el promedio nacional (Capital Federal, Santa Fe, Tierra del Fuego, San Luis, conurbano de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza) deben diferenciarse dos situaciones: a) provincias con un desarrollo industrial y de empresarialidad pyme que es de larga data (Capital Federal, Santa Fe, Córdoba, conurbano de Buenos Aires y Mendoza) y b) provincias con industrialización de establecimientos medios (61) inducida por promoción.

El resto de las jurisdicciones no sólo tienen un índice general de empresarialidad bajo, sino que además tienen un indicador referido estrictamente a las empresas pymes que es fuertemente inferior, en la mayoría de los casos, a la media nacional. Las situaciones de bajo desarrollo empresarial más extremas corresponden a las provincias de Tucumán, Corrientes, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Santa Cruz, Formosa, La Rioja y Catamarca.

La distribución territorial de las principales ramas manufactureras pymes (Cuadro 3 del Anexo IV), permite observar que, en la mayoría de los casos, hay un fuerte liderazgo productivo de las jurisdicciones conurbano de Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y resto de la provincia de Buenos Aires. Sólo en algunas actividades agroalimentarias ganan posiciones las pymes de las provincias que cuentan con la presencia determinante de recursos naturales; tal es el caso de Mendoza, Río Negro o Misiones. Más aún, una buena parte de las actividades pymes principales concentra gran parte de la producción (80 %) en menos de cinco jurisdicciones provinciales, incrementándose el nivel de concentración territorial cuanto menor vínculo tengan las actividades manufactureras con las demandas de consumos no durables locales y con la producción de agroalimentos.

En este sentido, podríamos distinguir dos tipos de jurisdicciones (62).

a) Las jurisdicciones en donde la especialización de las pymes industriales en sus recursos naturales y actividades primarias, vinculadas con los tradicionales “circuitos productivos regionales”, tales como el yerbatero en Misiones, el arrocerero en Corrientes, el algodonerero en el Chaco, el agrícola en el resto de Buenos Aires, etcétera. Podríamos, a su vez, agruparlas en aquellas basadas exclusivamente en forma directa, es decir, las especializadas solamente en la industrialización de productos del mar y/o de la actividad agropecuaria o forestal y/o de recursos mineros (Santa Cruz, La Pampa, Santiago del Estero, Salta, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, La Rioja y San Juan) y las basadas también en forma indirecta, es decir, aquellas especializadas además en bienes intermedios para la industria vinculadas a los recursos naturales o sus derivados (63) (es el caso de algunas jurisdicciones patagónicas: Neuquén, Río Negro, Chubut y del resto de Buenos Aires);

b) Las jurisdicciones de producción diversificada con independencia primaria, especializadas en una variada gama de ramas del espectro sectorial industrial. Según el origen de esa diversificación, las agrupamos en aquellas promocionadas (64) (Catamarca, La Rioja, Tierra del Fuego y San Luis) y las de tradición manufacturera (Mendoza, Tucumán, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal y conurbano de Buenos Aires).

Los datos y primeros argumentos presentados sobre la distribución geográfica de la actividad pyme ilustran con crudeza el rasgo de alta concentración territorial de la actividad manufacturera pyme: en 16 jurisdicciones del país no existe un desarrollo empresarial pyme industrial suficiente para conformar una malla sólida y articulada de relaciones técnicas y productivas (65). En efecto, sólo podemos inferir la presencia de firmas integradas (aunque sea parcialmente) en cadenas de valor o en estructuras subsectoriales de dimensión nacional, en aquellas

jurisdicciones en donde los índices de especialización evidencian el procesamiento de un recurso natural local. En esas 16 jurisdicciones, el resto de la estructura empresarial está compuesto por pymes que se hallan en distinto grado, al margen de la dinámica manufacturera nacional, orientadas más bien a satisfacer demandas de tipo "cuasi-servicios" locales o regionales, con limitadas expectativas de crecimiento, tanto por el lado de la producción como del empleo. De allí la alta concentración de las firmas pymes y micro en las ciudades capitales provinciales (véanse últimos casos del anexo III).

La crisis se extiende por el interior

Conflictos y protestas en diferentes puntos del país

Tras la difícil situación vivida en Salta, los conflictos desatados en Jujuy y Río Negro (ver notas aparte) revelaron un malestar social que comenzó a extenderse en el interior del país y que se manifiesta de diferentes formas:

1. Salta: después de los conflictos en General Mosconi y Tartagal, productores agropecuarios de Orán amenazaron con cortar la ruta 50 en los próximos días, si el Gobierno no responde a sus reclamos en torno de la reactivación del sector.

2. Chaco: Las autoridades temen que los disturbios generados hace un mes, cuando decenas de manifestantes ingresaron a la Legislatura para impedir una sesión donde se trataría la ley de ajuste, se repitan en los próximos días, ya que la norma está a punto de ser aprobada. La Coordinadora de Comicios Estatales convocó a un paro general con movilización para mañana.

3. Santiago del Estero: los productores agropecuarios de los distritos más castigados por las últimas inundaciones vienen realizando protestas y reclamos ante la Nación y la provincia, por créditos que les permitan superar la crisis.

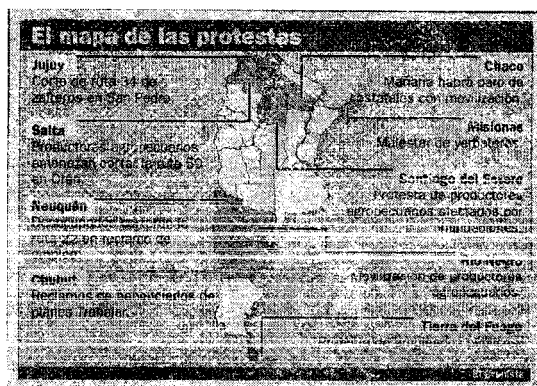
4. Misiones: existe un potencial conflicto con los verbateros, que esperan un fondo fiduciario del gobierno nacional para aguantar la producción de yerba mate, sin necesidad de malvender su producción. El gobierno misionero trasladó el pedido al secretario de Agricultura, Antonio Berhongaray.

5. Neuquén: el secretario de Relaciones con las Provincias, Walter Cevallos, reconoció la preocupación del gobierno por la situación que atraviesan algunas localidades del territorio neuquino, como Cutral-Có, donde la privatización de YPF dejó a cientos de empleados en la calle. Ayer, medio centenar de pobladores cortaron la ruta nacional 22 en reclamo de planes de empleo. La semana anterior, el intendente Eduardo Benítez había logrado disolver otra protesta al conceder subsidios por cuatro meses.

6. Chubut: cuatro mujeres beneficiarias de planes Trabajar se encadenaron frente a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y amenazaron con prender-

se fuego, si no se les restituye el monto original de esos subsidios.

7. Tierra del Fuego: el gobernador Carlos Manfredotti hizo aprobar el mes pasado una dura ley de ajuste, que redujo un 30 % los sueldos, suspendió el pago a proveedores, e implementó un régimen de jubilaciones anticipadas. El hecho originó fuertes protestas de los empleados públicos, quienes hace dos semanas agredieron a la ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, y al intendente de Río Grande, Jorge Martín.



A este cuadro, hay que sumarle los conflictos de larga data que posee la intervenida provincia de Corrientes y las protestas en la ciudad entrerriana de Concordia, donde el gobierno tuvo que otorgar planes Trabajar para evitar los cortes en la ruta 14. Fiel reflejo de un panorama social complicado.

2

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA LEYBA DE MARTI

Ampliación de la exposición de la señora diputada acerca del proyecto de ley sobre fomento para la micro, pequeña y mediana empresa

Nadie duda que la Argentina tiene por sus riquezas naturales, fuentes hídricas y recursos humanos, óptimas condiciones objetivas para lograr un proceso de crecimiento sostenido a largo plazo y mejorar en consecuencia el nivel de ingresos de todos sus sectores, habitantes y regiones. No obstante, Paul Samuelson, premio Nobel de Economía supo decir acertadamente que "la Argentina era un paradigma del fracaso del siglo XX".

Las transformaciones estructurales realizadas en la década del '90 fueron decisiones de política económica, que lejos están de constituir por sí solas un modelo de desarrollo y crecimiento a largo plazo, adecuado para responder a los requerimientos básicos de la población; esto es, generar empleo, mejorar el sistema de distribución del ingreso y asegurar la tan ansiada integración regional.

Es que las transformaciones de los noventa conviven hoy con profundos desequilibrios macroeco-

nómicos y asimetrías, sectoriales y regionales, cuya causa sin lugar a dudas es la falta de políticas activas a largo plazo que estimulen y confieran previsibilidad a los sectores de producción, y cuyo efecto son el desempleo, la retracción del consumo, la recesión y la marginación creciente de miles de argentinos.

El presidente De la Rúa al asumir la primera magistratura señaló que era imperativo generar el debate que permitiera explicar a la sociedad la importancia que tiene el sector productivo como generador de empleo y de divisas genuinas. Por ello, puso especial énfasis en señalar la necesidad de implementar una estrategia económica que posibilite el desenvolvimiento productivo del país. De ahí que la reforma laboral aprobada por este cuerpo y este proyecto de ley hoy en tratamiento, así como la reforma de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina son herramientas necesarias para lograr a corto plazo el desarrollo económico que nos debemos los argentinos desde hace varias décadas.

Es necesario recuperar la senda del crecimiento mediante políticas que estimulen la producción y la generación de valor agregado local, sin las cuales será improbable la creación de las condiciones necesarias para que en nuestro país se construya el marco adecuado para integrar al mercado de consumo y del trabajo, permitiendo así el desarrollo de sus pauperizadas economías regionales y el de sus 35 millones de habitantes.

Esta preocupación del presidente de la Nación no fue antojadiza; partió de un diagnóstico certero de la realidad dado por el continuo proceso de pérdida de competitividad de los sectores transables, y los desequilibrios macroeconómicos y sociales acumulados durante una década. Lástima que no todos atendieron ni entendieron la magnitud de la convocatoria formulada.

Nadie duda que el proceso de transformación que se iniciara en la década de los 90 se llevó adelante sin resolver dificultades de competitividad de nuestro sector productivo, en particular de aquellos sectores de mayor valor agregado o caracterizados por una fuerte presencia de las micro, pequeñas y medianas empresas. El sector industrial se enfrentó así a una apertura comercial sin gradualismo y con un tipo de cambio fijo.

La falencia de nuestra política económica se origina en la falta de complementación del proceso de privatizaciones, la integración regional y la convertibilidad, con políticas que prioricen la competitividad de los sectores transables. En la pérdida de competitividad el sector productivo y en especial las mipymes debieron pagar en estos últimos diez años tarifas de servicios, y un costo del crédito y de intermediación financiera que se incrementaron asimétricamente sobre los precios de las manufacturas.

Y a tal fin basta con preguntar: ¿cuánto avanzamos en los últimos años en la reducción del costo

financiero? Las elevadas tasas de interés y las restricciones al crédito caracterizaron la situación de las mipymes durante todo el plan de la convertibilidad. Pasaron los años y esta situación no se resolvió por las limitaciones que impuso el sector financiero al sistema productivo.

Mientras las industrias pretendían invertir y producir aun en difíciles momentos, el sistema financiero y en especial la banca privada no asumió riesgos y prefirió financiar desequilibrios fiscales.

Necesitamos que el sistema financiero no se divorcie de la producción, en particular en medio de la recesión actual que complica la cadena de pagos y dificulta más la reversión del ciclo económico.

Tampoco contamos en el Mercosur, a trece años de su creación, con instancias, instituciones y mecanismos que a través de acuerdos macroeconómicos eviten los perjuicios al sector productivo que afectan al país.

A su vez las denuncias frente a las prácticas de dumping demoran meses en resolverse y son de acceso limitado para las mipymes, de la misma manera que la tramitación de salvaguardias son costosas, largas y dificultosas, siempre y cuando se consigan. Todo esto pone de manifiesto que una micro, pequeña y mediana empresa no tiene defensa frente a esta realidad.

Las mipymes enfrentan dificultades de dos orígenes:

- De carácter endógeno, producidas entre otras razones por el sistema y modelo de organización empresarial, con escasa delegación de funciones; una deficiente o inexistente interrelación con sectores semejantes que genera su propio aislamiento, a lo que se le debe agregar las dificultades en la capacitación y reconversión de sus recursos humanos por falta de apoyo económico y financiero adecuado. Esto lleva a que por su reducido tamaño no puedan aprovechar economías de escala, atentan contra su permanencia y competitividad.

- De carácter exógeno, como las que tienen para incorporar tecnología, problemas de acceso al crédito, imposibilidad de utilizar instrumentos o herramientas que permitan aumentar su eficacia y en consecuencia su competitividad, sistemas de información dependientes sólo del mercado interno, escasas posibilidades de generar oferta hacia los mercados externos, falta del mercado debido a la concentración económica registrada en los últimos tiempos y a las regulaciones del Estado que discriminaban a las pequeñas empresas por su elevado costo de transacción financiera, presión impositiva y altos costos laborales.

Ambos caracteres condicionan ostensiblemente la situación de las mipymes, por cuanto éstas se caracterizan por usar tecnologías de producción intensivas en mano de obra. En consecuencia, los altos costos laborales y el sistema tributario nacional, provincial y municipal que son muy a pesar nues-

tro esencialmente regresivos, inciden en la competencia de las mismas.

El Estado debe ponerse al frente de los acontecimientos para formular una política que incentive la inversión y la producción industrial.

Este proyecto elevado por el Poder Ejecutivo, con las modificaciones realizadas por este cuerpo, constituye una herramienta idónea para enfrentar una crisis que es la más grave de las últimas décadas, para la mayoría de los sectores industriales y especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas. La política económica al servicio de la producción y del trabajo debe generar las condiciones para que nuestras empresas recuperen los mercados y la rentabilidad perdida.

El proyecto promovido, perfecciona la legislación vigente.

Al poco tiempo de haber asumido este gobierno, puso en marcha una serie de medidas que no se habían tomado antes, como:

- Promover la modificación de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, para que el mismo preste asistencia financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas cualquiera fuera la actividad económica en la que actúe, disponiendo a tal fin que el mismo no podrá otorgar préstamos superiores a 5 millones de pesos si la empresa solicitante tiene pasivos en otros bancos y la participación del mismo no es superior al 50 por ciento del total del pasivo; y a un millón de pesos si el Banco de la Nación Argentina es el único prestamista. Por otra parte, en el proyecto de ley en tratamiento el Banco de la Nación actuará como fiduciario del Fonapyme y también aportará activos por 100 millones de pesos para constituir el fondo de garantía para la micro, pequeña y mediana empresa, instrumentos sin los cuales los objetivos promovidos por el Poder Ejecutivo en este proyecto serían inviables a corto plazo.

- Instituir la obligación del uso de las facturas conformadas simplificando en consecuencia los costos operativos de las transacciones y evitando la evasión fiscal.

- Facilitar el pago de los servicios públicos a través de un tercer vencimiento de facturas de servicios públicos exclusivamente para pymes.

- Rebaja de las contribuciones patronales al 12 por ciento para la generación de nuevos empleos.

- Devolución inmediata del IVA para exportadores pymes.

- Conformación del Foro pyme que junto al Banco de la Nación Argentina realiza un control de las medidas puestas en marcha y su seguimiento permanente.

La preocupación del presidente de la Nación se manifestó desde la primera reunión de gabinete en el mes de enero, y el tema central fue la refinanciación de los pasivos de las pymes para los sectores agropecuario, industrial, comercial y de servicio instituidos en la ley 25.190.

Asimismo se ha implementado una moratoria fiscal y se están analizando sus alcances así como la posibilidad de hacerla extensiva al sector, previsional y bancaria.

Estas son algunas de las medidas que este gobierno adoptó, sin comprometer recursos futuros del Estado. Pero quiero recalcar que estas medidas adoptadas no comprometen recursos futuros del Estado, se implementaron con voluntad y decisión política que nos hace falta sin lugar a dudas para que en el siglo XXI la Argentina deje de ser paradigma del fracaso como dijera Samuelson de la del siglo XX.

En cinco meses se han sentado las bases para que la seguridad jurídica y la previsibilidad sean la base constitutiva del accionar de este nuevo proceso histórico. Seguridad y previsibilidad que nos permitirán situarnos en mejores condiciones en el orden mundial.

Queda mucho por hacer todavía por este importante sector de los mipymes, y vamos a seguir trabajando en ese sentido.

3

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA LISSI

Opinión de la señora diputada acerca del proyecto de ley sobre fomento para la micro, pequeña y mediana empresa

Cerca de tres millones de personas dejarían de sufrir el olvido, la exclusión y alguna de las formas de discriminación que padecen habitualmente, si contarán con los programas adecuados para su inclusión escolar y laboral.

Su inclusión laboral está en relación con su paso por la escuela, su educación en las escuelas comunes, cuando ello es posible, o en escuelas especiales. Esto depende de varios factores: la estimulación temprana, la atención por los servicios de salud de las obras sociales, de las prepagas, o simplemente de los fondos de la ley del cheque para las familias carenciadas que no tienen cobertura social porque los padres, si están trabajando lo hacen en negro o como ocurre más frecuentemente, están desocupados por largos períodos o de manera permanente.

En Gran Bretaña se han realizado relevamientos que permiten establecer una alta concomitancia entre pobreza y discapacidad. No creo que en nuestro país suceda algo muy diferente; no lo sabemos porque aún no se han actualizado los datos censales de 1960, última fecha en que fueron incluidos en el relevamiento.

Pero, tanto la estimulación temprana cuanto los programas de atención hospitalaria a estos niños, adolescentes o adultos especiales dependen de la capacitación de docentes y de profesionales médicos o paramédicos en cuyas carreras de grado el tema de la discapacidad no está contemplado. El apoyo

psicológico a la familia de las personas con discapacidad que es imprescindible para lograr buenos resultados en la estimulación temprana, en la integración educativa, laboral y social —y que está previsto en la ley 24.901— se realiza muy limitadamente porque no existen equipos multidisciplinarios en todos los hospitales, las obras sociales, las prepagas. Nuevamente se hace necesario apelar al fondo creado por la ley del cheque.

La ley 24.901, aprobada por el Congreso Nacional en 1997, aún no está totalmente implementada. Los servicios que ella prevé dependen de la ley del cheque, que establece una multa del 2 y el 4 por ciento para libradores que emitan cheques con vicios de forma o sin fondos y una multa para las entidades financieras que no cierran las cuentas corrientes por aplicación de las sanciones que establece la ley. No tengo duda que los bancos la cumplen, en lo que se refiere al cobro de las multas. Lo que parece no cumplirse es la remisión de los fondos recaudados al organismo ejecutor de las políticas para el colectivo de la discapacidad, así como también la inactividad en la aplicación de las sanciones a las entidades bancarias.

Entiendo que hacer depender de una multa todos los programas de atención a las personas con discapacidad es un recurso muy imperfecto. Sabemos que en la mayor parte de los casos la emisión de cheques sin provisión de fondos no es el propósito de los firmantes; la causalidad pasa por la interrupción de la cadena de pagos, resultado a su vez de procesos económicos que trascienden la voluntad individual, para encontrar sus raíces en situaciones del orden de lo supranacional.

Por otra parte, hacer depender de una multa la situación social y el reconocimiento de derechos humanos como son los de trabajar, de enseñar y aprender, circular libremente por el país, no sufrir discriminación, es dejar librado al azar el destino de un grupo importante dentro de la población, vulnerándose en forma solapada el principio de normalización que consagra la ley 24.901, y va de suyo que con él, el precepto constitucional de la igualdad, que para las personas con discapacidad pasa por la equiparación de oportunidades. A través de la normativa de la ley 24.901 se han diseñado 5 programas que atienden al objetivo prioritario de la integración social de las personas con discapacidad. Las vicisitudes en la aplicación de la ley del cheque —24.452— vinculadas con el incumplimiento del funcionario Pedro Pou, director del Banco Central, a quien le he iniciado una causa penal en el juzgado del doctor Bagnasco, ha determinado que en la actualidad los programas estén suspendidos por falta de recursos.

Todo esto me hace decir que recurrir a la reducción a la mitad del porcentual que integra el fondo estipulado por la ley de cheque para la atención de las necesidades de los discapacitados, implicará lisa y llanamente la imposibilidad de cumplir con los objetivos de la ley 24.901.

Y me pregunto, además, cómo se podría establecer fehacientemente que las empresas beneficiarias son realmente pequeñas y medianas: no es posible ignorar que para una gran empresa atomizarse en varias pequeñas, es una dificultad menor que puede solajarse con la colaboración de profesionales del manejo económico y del derecho, de modo tal que el loable fin que se persigue con esta ley se vería seriamente violado.

Por ello, considerando que hasta la actualidad las personas con discapacidad han sido marginadas de los bienes culturales de la sociedad, es mi propuesta que hasta tanto en el presupuesto nacional no se contemple una partida exclusiva para la atención de los requerimientos de la ley 24.901, no se modifique el porcentual del fondo destinado a ellos y consecuentemente voto en contra de la sanción de los artículos 44, 45 y 46 de la ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa.

4

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO BAYLAC

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre fomento para la micro, pequeña y mediana empresa

Políticas para las pymes

El país ha atravesado en los últimos años un agudo proceso de concentración económica en el que los frutos del crecimiento han quedado en pocas manos, en lugar de difundirse a la sociedad en su conjunto. Uno de los ámbitos donde esta inequidad es más notoria es el de las empresas pequeñas y medianas.

Para nosotros el apoyo a las pymes es esencial en el proceso de democratización y descentralización eficiente de la economía y constituye una de las bases principales de un modelo productivo integrado y diversificado.

No menos decisivo es su función como factor de cohesión social, en una sociedad fragmentada por diez años de sistemática aplicación de políticas que agudizaron la exclusión y la marginalidad de vastos sectores de la sociedad.

Las políticas públicas que proliferaron en la primera parte de los '90 se caracterizaron por un fuerte desencuentro con las demandas específicas de las pymes y mostraron importantes problemas de instrumentación y coordinación.

Por nuestra parte estamos convencidos de que la forma correcta de abordar esas políticas es hacerlo como parte constitutiva de la política económica global y no como una política social de salvataje, articulando eficientemente la acción pública con las iniciativas privadas, poniendo énfasis en la construcción institucional y descentralizando la ejecución de las diferentes políticas. Esta orien-

tación hará posible fortalecer las cadenas de valor agregado, facilitará la inserción de las pymes en el comercio internacional y propenderá a un creciente equilibrio regional.

La importancia económica y social de las pymes es innegable, pero quiero destacar con algunos números la enorme gravitación que este segmento de la vida productiva tiene para el presente y el futuro del país.

1. De acuerdo con los datos del Censo Económico de 1993, en los sectores de la industria, el comercio y los servicios existían 890.000 empresas pertenecientes al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Este universo insumía el 73 % del total del empleo y representaba el 60 % del valor agregado y el 99 % del total de establecimientos.

2. Si se excluyen a las microempresas, el universo de las pymes en los sectores industriales, comerciales y de servicios alcanzaba en 1993 a 66.000 empresas. Ese conjunto daba cuenta del 37 % del empleo, el 35 % del valor agregado y el 7 % de los establecimientos.

3. Según datos del Observatorio pyme de la UIA, en los últimos años el 16 % de las pymes industriales exportaba sistemáticamente, el 33 % lo hacía esporádicamente y el 51 % nunca había incursionado en los mercados externos.

Estos pocos datos ponen de relieve que las pymes constituyen un segmento de la vida productiva nacional que, sin duda, tiene entidad y representatividad suficiente como para ser elegidas como sujetos de las políticas productivas por parte de las autoridades nacionales: cualquiera sea el color y el signo político del gobierno de turno.

Se trata de un sector de la vida nacional que cumple con todos los requisitos para convertirse en un actor protagónico del desarrollo y no, como tradicionalmente se ha hecho, que se le brinde el trato de un enfermo que sólo es sujeto de medidas asistencialistas.

Pero para que esta distinción sea operativa es necesario que las autoridades nacionales, provinciales y municipales estén en condiciones de poner en marcha políticas activas, cuyo objetivo central apunta, como señala el artículo 1º del proyecto de ley sobre pymes enviado al Congreso de la Nación, al "fortalecimiento competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas... mediante la creación de nuevos instrumentos y la actualización de los vigentes, con la finalidad de alcanzar un desarrollo más integrado, equilibrado, equitativo y eficiente de la estructura productiva".

Aunque no puedo sustraerme a la tentación de insuflar un poco de optimismo -pese a un escenario económico que se caracteriza por el impacto negativo de las políticas de apertura indiscriminada, por las dificultades de acceso al crédito en condiciones de plazo, tasas y garantías razonables y por la concentración cada vez más elevada de los in-

gresos y de la riqueza que redundan en un achicamiento de la demanda dirigida a las empresas pymes-, tampoco quiero caer en el simplismo de un discurso triunfalista que no tiene en cuenta las fuertes restricciones económicas y financieras de la hora, la herencia recibida y las innumerables presiones internas y externas que se deben afrontar en el ejercicio diario del gobierno.

Más aún: sería irresponsable de mi parte como legislador de la Nación no tener en cuenta, a la hora de formular un proyecto de ley o discutir el de otros colegas o los enviados por el Poder Ejecutivo nacional, cuáles son los instrumentos con que cuenta el gobierno para poner en marcha las tan demandadas políticas activas.

En ese sentido, debe tenerse en claro que cuando se habla de políticas activas se está haciendo referencia, aunque de manera indirecta, a la necesidad de que el Estado intervenga en alguno de los mercados a través de la herramienta cambiaria, monetaria y financiera, o fiscal.

La sociedad en su conjunto ha decidido, a través del voto a los partidos mayoritarios, que es su deseo continuar con el régimen de convertibilidad de la moneda y el tipo de cambio de un peso igual a un dólar. Pero este deseo de la sociedad expresado a través de las urnas y de los innumerables sondeos de opinión, que ha tenido el indudable beneficio de abatir el flagelo de la inflación que nos asoló durante más de treinta años, tiene un costo que no es posible soslayar. Ese costo consiste en que ya no se cuenta con la política cambiaria como instrumento para intervenir en los mercados e inducir una modificación en una estructura de precios que puede estar perjudicando a amplios segmentos de la producción.

Pero los costos no se agotan ahí. Tampoco se puede hacer uso de la política monetaria, más allá de un cierto margen, estrecho por cierto, que permite la ley orgánica del Banco Central. Ocurre que la emisión de moneda sin respaldo de divisas no cabe dentro del régimen monetario vigente, y el margen admitido contra títulos públicos es bajo. Más aún: en el contexto de un país que paga una elevada prima de riesgo, cualquier movimiento monetario que en la percepción de los inversores externos puede poner en peligro la solvencia y liquidez del sistema financiero, constituye un signo de desconfianza que se traduce en una retracción de los flujos de capital hacia el país.

Por lo tanto, el único instrumento de que dispone el gobierno para llevar adelante una política activa es la herramienta fiscal. Pero a ninguno de los señores diputados se le escapa que una política activa de base fiscal significa alguna, varias o todas, de las siguientes alternativas: subsidios, desgravaciones impositivas, exenciones tributarias, diferimientos de impuestos, modificaciones arancelarias y/o reintegros o reembolsos de impuestos, por nombrar sólo a las más conocidas y usadas.

Excepto el caso de las modificaciones arancelarias, cuyo costo fiscal dependerá de que la medida de estímulo sea un aumento o una reducción del arancel de importación, en las restantes se trata de un incremento del gasto público o de una reducción de los ingresos tributarios, esto es, un deterioro en el resultado de las cuentas públicas. En condiciones de penuria fiscal como en las que se encuentra atravesando la economía argentina, resulta evidente que una política activa de base fiscal tiene también, lamentablemente, un estrecho margen de acción.

El gobierno nacional ha tenido muy presente esta restricción a la hora de formular su conjunto de políticas activas, cuyos ingredientes principales son, además de una serie de acciones específicas a las que luego haré referencia, la ley pyme y el paquete de medidas procompetitividad que poco tiempo atrás fue dado a conocer. Este paquete, como lo advirtió el ministro Machinea, "tendrá un costo fiscal estricto y muy chico".

Entre las acciones específicas que también contribuyen a mejorar las condiciones generales de desenvolvimiento de las empresas pyme, cabe mencionar a las siguientes:

- Procurar la baja en la prima de riesgo país, ya que ello se traduce en una disminución de las tasas internas de interés. Se trata de un prerequisite para que las condiciones de acceso al crédito por parte de las pymes constituyan un factor que mejore el entorno competitivo de este segmento de empresas.

- Caracterización de las pymes como grandes usuarios en el acceso al mercado eléctrico mayorista y a la red gasífera.

- Postergación del ajuste tarifario por inflación internacional en el servicio de gas.

- Tercer vencimiento en las facturas de gas para pyme a una tasa igual a la del segundo vencimiento.

- Rebaja del 20 % en los abonos telefónicos comerciales.

- Rebaja de peajes.

- Moratoria impositiva y previsional.

- Cálculo del impuesto a los intereses pagados sobre la base de una tasa de interés no superior al 15 %.

- Reformulación del régimen de monotributo para las microempresas.

- Pagar dentro de los cinco días de la aprobación administrativa las devoluciones de IVA sobre exportaciones de hasta \$ 50.000.

- Nuevo sistema administrativo en la AFIP para la devolución del IVA sobre exportaciones que no implique para las pymes la constitución de garantías.

- Que los representantes de cámaras empresarias puedan actuar como veedores de las importaciones del "canal verde" de la Aduana.

- Líneas de crédito del Banco de la Nación Argentina para las compras de bienes de capital de origen nacional, a una tasa bonificada del 7 % anual.

- Rebaja de multas por inhabilitación de cuentas corrientes bancarias.

- Proyecto de un nuevo instrumento de pago ejecutivo que amplíe el financiamiento a las pymes. Se discute la posibilidad de un sistema similar a la "duplicata" que rige en Brasil.

- La reforma laboral estableciendo la posibilidad del beneficio de la extensión del período de prueba sin costo de indemnización, para incrementar y/o incentivar la demanda laboral.

Ya dentro del marco del proyecto de ley pyme, cabe señalar dos aspectos centrales: la propuesta de nuevos instrumentos y la reformulación de los programas existentes. En el primero de los casos, cabe citar a las siguientes nuevas herramientas de promoción:

- Red de agencias regionales de desarrollo productivo.

- Creación del Fonapyme, con un aporte inicial de 100 millones de pesos, destinado a realizar contribuciones de capital y brindar financiamiento a largo plazo para inversiones productivas de las empresas pyme y otras formas asociativas que las nucleen.

- Creación del Fogapyme, también con un aporte inicial de 100 millones de pesos, destinado a otorgar garantías en respaldo de las que emitan las sociedades de garantía recíproca (SGR), y ofrecer garantías directas a las entidades financieras acreedoras de las pymes y otras formas asociativas que las nucleen.

- Modificaciones en el sistema de las SGR que redundarán en beneficio de las pymes.

- Implementación efectiva de un sistema de información pyme.

- Compre pyme: establecimiento de un margen de preferencia del 5 % en el precio de oferta en licitaciones y concursos de organismos de la administración pública nacional, instando a las provincias y municipalidades a seguir el ejemplo nacional.

En el caso de la reformulación de los programas existentes, la orientación general será:

- Promover una mayor transparencia y mejorar el control.

- Reducir las ineficiencias en la implementación de programas.

- Articulación con programas y políticas provinciales y municipales.

- Eliminación de duplicaciones y trámites redundantes.

En suma, los ejes conceptuales de la nueva política pyme que propone el gobierno nacional pasan por

- Estimular la asociatividad entre las pymes.

- Promover la creación de nuevas pymes.
- Coordinar los instrumentos de política en paquetes integrales.
- Apoyar la descentralización de la implementación de los instrumentos de promoción.
- Articular las políticas y las herramientas con otros organismos públicos y con los actores locales.

Finalmente, y en referencia al paquete de medidas procompetitividad, cabe destacar las siguientes iniciativas:

- Aceleración de los procedimientos para la apertura de investigación por dumping y/o prácticas desleales de comercio.
- Establecer precios de referencia para evitar las maniobras de subfacturación.
- Modificación del régimen de *draw back*.
- Modificación del régimen de importación de bienes de capital no producidos en el Mercosur y disminución del arancel al 3 %.
- Nuevo régimen de importación de bienes de capital para grandes inversiones industriales (conocido como "planta llave en mano") y disminución del arancel al 0 %.
- Modificación de los reintegros y reembolsos a la exportación para beneficiar a los productos con mayor valor agregado.
- Subsidio a las tasas de interés abonadas por las pymes.
- Financiamiento del IVA incluido en la compra de bienes o importaciones de bienes de capital destinados a procesos productivos orientados al mercado externo.
- Régimen de reintegro simplificado del impuesto atribuible a operaciones de exportación.
- Relanzamiento del Mercosur sobre la base de una propuesta cuyos ejes centrales pasan por:

1. El perfeccionamiento de la unión aduanera.
2. El desarrollo institucional del Mercosur.
3. La definición de mecanismos e instrumentos para mejorar la coordinación de las políticas macroeconómicas.
4. La formulación de estrategias para la reconversión productiva de los sectores y regiones afectados negativamente por el proceso de integración.

La Alianza pretende fomentar la conformación de una estructura productiva diversificada, capaz de aprovechar las oportunidades que abre la globalización y de mejorar la competitividad de nuestra economía en el mundo. Por eso se propone implementar políticas efectivas que apunten a expandir y fortalecer al empresariado nacional, y en especial a las pequeñas y medianas empresas, que serán la palanca del crecimiento argentino. Se trata de apoyarlas para que puedan ampliar sus mercados y de ese modo generar empleos genuinos, in-

crementar la capacidad exportadora del país e impulsar la creación continua de redes de difusión del desarrollo.

Pretendemos que la promoción activa de las pymes y los microemprendimientos multiplique las respuestas creativas a los desafíos actuales de la competencia e impulse una distribución de la riqueza más equitativa y mejor repartida territorialmente, a la vez que permita el uso intensivo e integral de las potencialidades de crecimiento que —aunque relegadas— posee nuestro país.

Medidas pro competitividad: estado de situación

Se pueden clasificar de la siguiente manera: por un lado, las que tienen que ver con la reducción del costo de la inversión; por el otro, las orientadas a mejorar el tipo de cambio exportador y los aspectos financieros de las exportaciones; finalmente, aquellas tendientes a brindar apoyo crediticio a las pymes.

En este informe se analizan los dos primeros grupos, centrando la atención en los pasos que se han dado durante el último mes para implementar a través de resoluciones y decretos las medidas "procompetitividad".

El tratamiento de los aspectos vinculados al apoyo a las pymes queda pendiente por cuanto está muy vinculado a la aprobación de la ley que se encuentra en tratamiento en el Congreso.

La primera cuestión que aparece es el rápido grado de avance en la sanción de las normas. El segundo aspecto es que las nuevas resoluciones, decretos, etcétera, tienen como antecedente alguna experiencia previa, reciente o no muy alejada en el tiempo. En principio ello constituye un hecho auspicioso, toda vez que permitiría alcanzar una mayor eficiencia en la aplicación de las medidas.

I. Reducir los costos de las inversiones

I.1. Régimen de importación de bienes integrantes de grandes proyectos de inversión destinados a empresas industriales que cuenten con un plan de mejoramiento de su competitividad.

I.1.1. Resolución 256/2000 del MEyOySP (3/04/2000).

El régimen es similar al que se aplicó en el pasado reciente para la importación de plantas llave en mano.

Características principales:

—los bienes deberán ser nuevos, formar parte exclusivamente de una nueva línea de producción y estar afectados directamente a nuevas plantas industriales o a ampliaciones y/o modernización de plantas existentes, destinadas a la producción de bienes tangibles;

—el veinte por ciento (20 %) del valor de los bienes incluidos en el proyecto deberá ser de origen

nacional pero la autoridad de aplicación queda facultada para autorizar una menor proporción;

—establécese para los bienes que se importen de extrazona al amparo del presente régimen que sean integrantes del proyecto: cero por ciento (0 %) de derecho de importación.

Con relación a la restricción del 20 % de contenido nacional la autoridad de aplicación queda facultada para autorizar una menor proporción si la empresa demostrara la imposibilidad de alcanzar el abastecimiento. Ante tal imposibilidad la beneficiaria deberá realizar un programa de capacitación de sus recursos humanos y un plan de investigación y desarrollo, que en conjunto sumen un monto igual o superior al faltante para el cumplimiento del requisito de compras de bienes de origen nacional.

El régimen se extenderá hasta fines del 2000.

Si un comentario cabe sobre esta norma es el referido al corto plazo de vigencia: diciembre de 2000. Quizás este en el espíritu prorrogario, pero no surge de la letra de la disposición.

Los meses que median parecen insuficiente para que las firmas diseñen sus nuevas estrategias de plantas y concreten los proyectos mediante la importación de bienes de capital.

Daría la impresión, entonces, que la norma sería de mayor aplicación en aquellos casos para los cuales ya existen proyectos definidos.

1.1.2. Reglamentación de la resolución anterior. Resolución 204/2000 (Secretaría de Industria).

Define dentro de los principales temas:

—los requisitos para que un proyecto cumpla con mejoras de competitividad;

—la base sobre la que se define el valor del 20 % de los bienes de origen nacional; y,

—el programa de capacitación de recursos humanos, si no cumple con la restricción del 20 % de bienes de origen nacional.

Para el análisis de los proyectos la Secretaría de Industria podrá contar con la asistencia de terceras entidades tanto de carácter público como privado.

1.2. Resolución 255/2000 del MEyOySP y su resolución reglamentaria 177/2000 de SICyM.

Reduce al 3 % el derecho de importación extrazona para bienes de capital, informática y telecomunicaciones completos y también para partes que se destinen a bienes de capital no producidos en el Mercosur.

—Se modifica la resolución 19 de enero del 1999 por la cual los aranceles se redujeron del 14 % —en algunos casos los aranceles son superiores— al 6 %. El proceso de importación para obtener el beneficio no es automático y luego de presentado un conjunto de información relativa a la firma, a los bienes a importar, a producir, etc., se llama a consulta pú-

blica para corroborar que no haya producción en el país;

—en la nueva resolución se fija un monto mínimo de importación de u\$s 400.000 (antes eran u\$s 200.000) a partir del cual las empresas deben demostrar su relación contractual con un ente certificador acreditado y comprometerse a la obtención de la certificación de un sistema de gestión y aseguramiento de la calidad para los bienes a ser producidos en el país y/o para la prestación de los servicios;

—se reducen los plazos de los trámites.

Es muy posible que a partir del aumento del monto mínimo para exigir la certificación de normas de calidad (de 200.000 a 400.000 dólares) se beneficie a las empresas de menor tamaño, que no deberán pagar por el trámite. Hasta el presente y por la magnitud de los gastos involucrados en el certificado y otros trámites (gestión de los despachantes de aduana que cobran comisión posterior al resultado de la aprobación) sólo tenían acceso a los beneficios de la reducción arancelaria las empresas de mayor tamaño.

La experiencia pasada en cuanto a la aplicación de este régimen no ha sido fructífera si se la mide en función del número de bienes (360) que se incorporaron —por intermedio de esta modalidad de importación— al listado de “no producidos”. Puede que los cambios introducidos por la nueva normativa agilicen los procesos. Pero aún así subsiste una gran carga burocrática que quizá pueda reducirse si se define un listado positivo de bienes producidos en el Mercosur limitándose el trámite sólo a la consulta pública, la que podría llegar a ser: posterior a la importación si se opta por garantizar la diferencia entre el 3 % y el arancel anteriormente vigente; o anterior, si se decide no garantizar.

1.3. Financiamiento del IVA para la compra o importaciones de bienes de capital destinados a procesos productivos orientados al mercado externo.

1.3.1. Decreto 349/2000 (27/04/2000).

Se extienden los plazos para el financiamiento del IVA de cuatro a seis años para compras o importaciones de bienes de capital destinadas a actividades distintas a la minera.

También se lleva a seis años el término para inversión en obras de infraestructura física para la actividad minera. Se fijan cuatro años para compras o importaciones de bienes de capital destinados a la actividad minera cuando el proyecto sea nuevo y dos para cuando ya esté en marcha.

1.3.2. Resolución 213/2000 (08/05/2000).

La norma precisa aspectos —hasta el presente no del todo definidos— relacionados con los requisitos para acreditar que un bien de capital se va a destinar a producir bienes con destino a la exportación.

En esencia la reglamentación se vincula con los siguientes aspectos:

—certificación de calidad. Las empresas deben acreditar que los bienes a producir con la nueva tecnología poseen certificado de calidad; en su defecto, se les permite hasta un año de tiempo para la obtención del mismo;

—compromisos de exportación. Se correlacionan con el plazo de financiamiento del IVA: a mayor plazo, mayor compromiso;

—la exigencia de no transferencia de los bienes adquiridos durante el lapso del financiamiento y la no enajenación de la empresa beneficiaria (excepto autorización de la Secretaría de Industria).

En términos generales esta norma, en conjunción con la anterior (extensión del plazo de financiamiento del IVA), tiende a hacer más ágil que en el pasado la operatoria del financiamiento.

II. Tipo de cambio y aspectos financieros de las exportaciones

II.1 Reintegros

Las posiciones arancelarias NCM (Nomenclatura Común Mercosur) alcanzadas por los aumentos de los reintegros fueron más de 4.000 (sobre cerca de 10 mil):

—los principales cambios se dieron en las cadenas agroindustriales y dentro de éstas en las agroalimenticias. Los aumentos más elevados (en promedio, dos puntos porcentuales) recayeron principalmente en rubros como las carnes y sus preparaciones (hamburguesas, etc.), lácteos, frutas y verduras;

—dentro de los cereales se benefició al arroz. Para los alimentos que se venden en góndolas (que no son los que tradicionalmente se exportan) el valor máximo pasó del 10 % al 12 %. También se elevaron los reintegros de los siguientes productos de origen agropecuario: fibra de algodón (del 3,2 % al 4,1 %), lanas peinadas y cardadas (del 5 % al 6,8 %) y maderas (del 4,1 % al 5,4 %), así como de los productos que siguen en las respectivas cadenas. La vestimenta al igual que el calzado y los muebles se ubicaron en el máximo del 12 % (el nivel anterior era el 10 %).

En el resto de los productos industriales, en general, no se alteraron las alícuotas de los insumos básicos, químicos, siderúrgicos, celulósicos, etc. En cambio, se produjeron modificaciones en los tubos de acero y aluminio y otras manufacturas metálicas y los plásticos. Los reintegros de los bienes de capital pasaron del 10 % al 12 %.

Los cambios introducidos representan un aumento del costo fiscal del orden de los 55 millones de dólares, que equivale a medio punto porcentual de las ventas que la Argentina realiza a países de extrazona. (Los reintegros no se aplican en el caso del Mercosur.)

Para los sectores más beneficiados el aumento del tipo de cambio oscila entre el 1,5 % y el 2 %.

II.2 *Decreto 313/2000. Para agilizar los procesos de pago al exportador mediante la aplicación del régimen de draw-back. El régimen de draw-back tiene por objeto la restitución total o parcial de los importes que se hubieren pagado en concepto de derechos e importación y tasa de estadísticas que gravaron la importación para consumo, siempre que la mercadería fuera exportada para consumo, luego de ser sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial.*

El decreto faculta a la AFIP para que, junto con la autoridad de aplicación (SICyM), diseñe un nuevo sistema de devolución de impuestos.

De acuerdo con lo averiguado el sistema que se está analizando para implementar consistiría en la creación de una cuenta corriente a favor del exportador para que con sus saldos pueda pagar otros tributos.

II.3 *Decreto 298/2000 modifica el decreto 855/97, que estableció un régimen simplificado opcional de exportación.*

La modificación consiste en elevar de 5 mil a 10 mil dólares (por operación de exportación) el monto sujeto a régimen simplificado.

II.4 *Resolución general 829/2000 de la AFIP sobre devolución del IVA y los reintegros a la exportación. Régimen de reintegro simplificado del impuesto atribuible a operaciones de exportación.*

Las empresas podrán pedir que se efectúe la acreditación, devolución o transferencia del impuesto facturado, a los treinta días, en los siguientes casos:

1) que en los doce meses anteriores a la presentación el importe total de las solicitudes interpuestas no haya superado los \$ 600.000;

2) que efectúen una solicitud mensual que no exceda la suma de \$ 50.000, conformada exclusivamente por facturas o documentos equivalentes cuya antigüedad no exceda un año (parece que se están pagando en cuotas y con demoras).

5

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO HERNANDEZ

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre fomento para la micro, pequeña y mediana empresa

Es fácil y gratificante participar en el debate de un proyecto de ley como el que nos ocupa, que trata de la concreta implementación de políticas activas orientadas al crecimiento, particularmente después de debatir y lograr los consensos necesarios para la sanción de otros instrumentos normativos de emergencia, destinados a superar la crisis de financiamiento del sector público y ordenar las relacio-

nes entre el Estado nacional y las provincias, entre otros temas.

Es particularmente gratificante que esta Honorable Cámara, después de atender lo urgente, se ocupe de lo importante, lo que nos reclama constantemente la gente, lo que la Alianza prometió en su plataforma electoral.

Las micro, pequeñas y medianas empresas son esenciales para crear empleo y descentralizar la economía nacional.

Durante el proceso electoral dijimos que una de las características de las economías avanzadas es la complejidad de su trama empresarial, compuesta por firmas de los más variados tamaños, en contraposición con el actual modelo de concentración, en el que las corporaciones internacionales ejercen un dominio casi absoluto.

Este proyecto apunta a promocionar un sector ampliamente mayoritario de la producción nacional: a los micro, pequeños y medianos agricultores, ganaderos industriales y de los servicios en general, tradicionalmente librados a su propia suerte en un mercado que no los coloca en igualdad de oportunidades con las grandes empresas. Ellos han sufrido, juntamente con los trabajadores, la más monstruosa e injusta transferencia de ingresos que registra nuestra Nación.

Esta herramienta legal que hoy sancionaremos tiene como objetivo central empezar a corregir esta injusticia, implementándose a tal fin los siguientes instrumentos:

a) un fondo de financiamiento para que esas empresas puedan acceder al crédito con tasas ventajosas;

b) un sistema de garantías que solucione el acceso de estas empresas al sistema financiero, en particular al financiamiento de exportaciones;

c) asesoramiento técnico para la conformación y evolución de las mipymes;

d) agencias de desarrollo en todas las jurisdicciones, que funcionarán como verdaderas incubadoras de proyectos y empresas.

No podemos ocultar nuestra satisfacción como provincianos toda vez que la provincia de Catamarca, a la que represento, ha sancionado en el pasado período parlamentario una ley de creación de la Agencia de Desarrollo; y es mayor aun nuestro orgullo cuando esta iniciativa no es otra cosa que el reflejo de las expectativas de nuestra gente, puestas en evidencia a través de procesos participativos en la planificación estratégica consensuada que impulsó el gobierno del Frente Cívico y Social.

Si bien es cierto que no todas las economías regionales podrán aprovechar en igual medida los beneficios del presente proyecto, por las fuertes asimetrías internas y que las deferencias de escala que caracterizan la producción artesanal tal vez requieran de otros instrumentos específicos, con la sanción de este proyecto comenzamos a delinear el

perfil del país que queremos y que el constituyente de 1994 bosquejó en la «cláusula del progreso» en términos de crecimiento armónico de la Nación y de adopción de políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.

Por los fundamentos brevemente expuestos, el bloque de diputados del Frente Cívico y Social de Catamarca votará favorablemente este proyecto de ley.

6

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR DIPUTADO GALLAND

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley sobre fomento para la micro, pequeña y mediana empresa

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso obtuvo dictamen el 24 de abril de 2000 en las comisiones de Pymes, de Finanzas, de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General habiéndosele realizado algunas modificaciones con respecto al proyecto original.

Podemos dividirlo en nueve capítulos de acuerdo al siguiente esquema:

- I. Objeto y definiciones.
- II. Acceso al financiamiento.
- III. Integración regional y sectorial.
- IV. Acceso a la información y a los servicios técnicos.
- V. Compre mipyme.
- VI. Régimen de crédito fiscal para capacitación.
- VII. Consejo Federal de las Mipymes.
- VIII. Modificación a la Ley de Cheques.
- IX. Disposiciones generales.

Objeto y definiciones

Tiene como objeto el fortalecimiento competitivo de las micro, pequeñas y medianas empresas que desarrollen actividades productivas, mediante la creación de nuevos instrumentos y actualización de los vigentes.

Según el Censo Económico de 1994 existían 890.000 firmas micro, pequeñas y medianas en los sectores de comercio, industria y servicios, las cuales generaban el 73 por ciento de los puestos de trabajo declarados y el 60 por ciento del valor agregado.

Teniendo en cuenta esa representatividad, en los últimos años se crearon diversos instrumentos que evidenciaron en la práctica defectos de implementación que hicieron que su impacto fuera casi inexistente, por lo cual el proyecto los actualiza e incorpora otros que pueden ser considerados novedosos, para lograr un impacto positivo en las mipymes de todo el país.

La autoridad de aplicación considerará qué empresas son consideradas mipymes, contemplando

las especificidades de los distintos sectores y regiones, sobre las bases de personal ocupado, valor de las ventas y valor de los activos aplicados a los procesos productivos.

II. Acceso al financiamiento

Uno de los principales problemas que afronta este sector, es el de acceso al crédito que requiere toda empresa para poder desarrollar sus proyectos. Para intentar brindar una solución se crean y se modifican algunos instrumentos:

- a) Creación del Fonapyme;
- b) Creación del Fogapyme.
- c) Sociedades de garantía recíproca (SGR);
- d) Régimen de bonificación de tasas.

A. Creación del Fonapyme

Se crea el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objeto de realizar aportes de capital y brindar financiamiento a largo plazo para inversiones productivas.

El BNA y la Secretaría de Hacienda, utilizando en este último caso los activos integrantes del Fondo Fiduciario que administra el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), deberán asumir el compromiso de suscribir certificados de participación en el Fonapyme por hasta la suma de 100 millones de pesos.

A través del Fonapyme, el Estado nacional compartirá los riesgos de los nuevos emprendimientos con los empresarios que los generen, brindando de esta forma una oferta de financiamiento para este tipo de iniciativas.

La elegibilidad de los proyectos a financiar con los recursos del Fonapyme estará a cargo de un comité de inversiones, compuesto por miembros designados por el Poder Ejecutivo, de los cuales uno será propuesto, ad hoc, por la provincia en la cual se radique el proyecto bajo tratamiento.

Al comité le corresponde fijar la política de inversión, establecer términos y condiciones para el otorgamiento del financiamiento que brinde y actuar como autoridad máxima para la aprobación de los emprendimientos.

Deberá prever mecanismos objetivos de asignación del Fonapyme que garanticen una distribución equitativa de las oportunidades de financiación de los proyectos en todas las provincias.

La recepción y aprobación de proyectos deberá efectuarse mediante concursos públicos.

B. Creación del Fogapyme

Se crea el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con el objeto de otorgar garantías en respaldo de las que emitan las SGR, y ofrecer garantías directas a título oneroso, a las entidades financieras acreedoras de las mipymes.

El Sistema de Garantías para pymes fue creado por la ley 24.467 sobre la base de un nuevo tipo

social a la Ley de Sociedades Comerciales: las sociedades de garantía recíproca (SGR), pero su desarrollo fue lento con un bajo impacto.

El objetivo social principal de las SGR, es el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos.

El Fogapyme tendrá dos (2) funciones principales:

- a) La primera que tenderá a ser la única a largo plazo, es la de brindar garantías de segundo piso a las SGR, que les permita a éstas cubrir una parte del riesgo que han asumido con el otorgamiento de las garantías de primer grado a favor de los acreedores de las mipymes;
- b) La segunda es la de ofrecer garantías de primer grado a favor de dichos acreedores en aquellas regiones o sectores de actividad que no dispongan de una oferta de garantías por parte de las SGR.

El Fogapyme tendrá la forma de un fideicomiso, y la política de otorgamiento de garantías estará a cargo de un comité de administración, presidido por el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa debiendo establecer la política de los recursos del Fogapyme, fijar los términos, condiciones y requisitos para regarantizar a las SGR y para otorgar garantías a los acreedores de las mipymes.

Se constituirá mediante un aporte inicial equivalente de 100 millones de pesos en activos que serán provistos por el BNA y por la Secretaría de Hacienda, utilizando en este último caso los activos integrantes del Fondo Fiduciario que administra el BICE.

Un aspecto muy importante del Fogapyme, es que también queda abierto al aporte de organismos internacionales, de entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras y de gobiernos provinciales o municipales.

C. Sociedades de garantía recíproca (SGR)

Se modifica el actual régimen, con el criterio general de dotarlas de mayor flexibilidad para su funcionamiento y estimular su creación y desarrollo tendiendo a un mayor equilibrio en la participación de los socios partícipes y de los protectores.

Las SGR, creadas en el título II de la Ley Básica de las pymes (24.467), tienen como objeto social principal el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes, pudiendo brindarles asesoramiento técnico, económico y financiero en forma directa o a través de terceros.

Están constituidas por socios partícipes, que son las pymes, y socios protectores, que son todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo.

Toda SGR deberá contar con un mínimo de socios partícipes que fijará la autoridad de aplicación,

en función de la región donde se radique o del sector económico que la conforme:

D. Régimen de bonificación de tasas

La política de bonificación de tasas es solventada por el Estado nacional a través de la correspondiente partida presupuestaria, y en el proyecto adquiere el carácter formal de instrumento estable y permanente a favor del sector, despejando las dudas que genera la actual situación.

Se introducen las siguientes modificaciones a la ley 24.467:

- Se favorecerá con una bonificación especial a las mipymes nuevas o en funcionamiento, localizadas en ámbitos geográficos donde se registren tasas de crecimiento de la actividad inferiores a la media nacional y de desempleo superiores a ese indicador.
- Se establece como condición para el otorgamiento de nuevos cupos de bonificación de tasas a entidades financieras que hayan cumplido con un porcentaje mínimo de otorgamiento de préstamos de los cupos anteriores.
- Se excluye del régimen, las operaciones de préstamo destinadas a la refinanciación de pasivos de las empresas.
- Se incluye como requisito que las entidades financieras no pueden discriminar entre clientes y no clientes para el otorgamiento de créditos a tasa subsidiada, ni establecer como condición de dicho otorgamiento la adquisición de otros productos financieros no vinculados con la operación principal.

III. Integración regional y sectorial

Se impulsará el desarrollo de una red de agencias regionales de desarrollo productivo, a través de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, que brindará asistencia a las mipymes de las distintas regiones del país y cuyos principios serán: orientación a la demanda, descentralización, asociación entre el sector público y el privado, colaboración y cooperación institucional, trabajo en red y cofinanciamiento.

La Sepyme privilegiará y priorizará la articulación e integración a la red, de aquellas agencias y centros empresariales ya existentes en las provincias.

Los fondos necesarios para la puesta en marcha de la red, provendrán de asignaciones contempladas en los contratos de fideicomiso constitutivos del Fonapyme y del Fogapyme.

IV. Acceso a la información y a los servicios técnicos

Se crea un sistema de información Mipyme que operará con base en las agencias regionales, que tendrá por objetivo la recolección y difusión de in-

formación comercial, técnica y legal que se juzgue de interés para el sector.

Los principios que regirán el desarrollo y funcionamiento de estos sistemas de apoyo son los de fortalecimiento de la capacidad técnica regional y local, y de intercambio de conocimientos y experiencia entre los distintos nodos de la red.

Se crea el Registro de Consultores Mipyme en el que deberán inscribirse los profesionales que deseen ofrecer servicios mediante la utilización de instrumentos y programas de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa. La inscripción en este registro permanecerá abierta con carácter permanente.

Las provincias podrán adherir al Registro y al Sistema de Entrenamiento y Capacitación, para incluir a todos los prestadores de servicios de asistencia técnica de la red.

V. Compre Mipyme

Las jurisdicciones y entidades del sector público nacional, deberán otorgar un derecho de preferencia del 5 por ciento para igualar la mejor oferta y ser adjudicatarias de las licitaciones o concursos para la provisión de bienes y servicios producidos en el país a las mipymes.

El Poder Ejecutivo podrá establecer un régimen de compras que permita a los citados organismos contemplar ofertas por volúmenes parciales, con el propósito de facilitar e incrementar la participación de las mipymes en la adjudicación de licitaciones y concursos en cantidades acordes con su escala de producción.

VI. Régimen de crédito fiscal para capacitación

La ley 22.317 establece que los establecimientos industriales que ocupen más de cuatro trabajadores para cumplir funciones o desarrollar tareas comprendidas en el ciclo económico productivo total, podrán acceder al cómputo del crédito fiscal por capacitación, que en ningún caso podrá exceder del 8 por mil de la suma total de los sueldos, salarios y remuneraciones abonados al personal ocupado.

Dicho crédito fiscal se instrumenta mediante certificados, cuyo cupo anual es establecido por el presupuesto de la administración nacional.

El proyecto, a través de la modificación de los artículos 2º y 4º de la mencionada ley, eleva el monto máximo de los certificados de crédito fiscal correspondiente al cupo administrado por la Sepyme, al 8 por ciento de la suma total de los sueldos abonados al personal ocupado en mipymes, correspondiente a los últimos doce meses.

Esta modificación se propicia con la convicción de que contribuye al logro de los fines para los cuales el régimen ha sido instituido, y considerando la escasa magnitud de la masa salarial bruta, sobre la cual se calcula la alícuota que sirve como tope máximo para otorgar los certificados.

VII. Consejo Federal de las Mipymes

Se crea este consejo, el que estará integrado por los ministros de Producción de las provincias y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el secretario de la Sepyme.

Su misión será definir objetivos comunes y unificar criterios entre las distintas jurisdicciones para una equitativa aplicación de los instrumentos de fomento a las mipymes en todo el país.

Está compuesto por los siguientes órganos:

- La Asamblea Federal. Integrada por las personas designadas por cada jurisdicción.
- El Comité Ejecutivo. Que realizará sus actividades de acuerdo a las resoluciones adoptadas por la asamblea y estará integrado por los miembros que establezca la Asamblea Federal. Confeccionará el reglamento de funcionamiento del Consejo Federal.
- El Consejo Federal de las Mipymes. Tendrá como funciones, entre otras, la adopción de normas nacionales y provinciales que fomenten el desarrollo de las mipymes; promover la homogeneización de las legislaciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires; implementar esquemas de simplificación de trámites y proponer el criterio de distribución de fondos entre las distintas jurisdicciones.

VIII. Modificaciones a Ley de Cheques. Imposición de las multas

Se propicia la reducción de los montos de las multas por cheques rechazados, tanto por motivo formal como por no poseer fondos acreditados en cuenta, estableciéndose en el 5 por mil en el primer caso y en el 1 por ciento para el segundo. Actualmente esos porcentajes son del 2 por ciento y del 4 por ciento, respectivamente. Deberá compensarse con partidas presupuestarias específicas lo que se afecte o disminuya de los fondos destinados a los discapacitados.

IX. Disposiciones finales

Se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento del Fogapyme y del Fonapyme integrada por tres diputados y tres senadores.

Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para establecer formas y procedimientos que faciliten la asociación entre el Estado nacional y el capital privado a los fines de esta ley.

Por todo lo expuesto voto afirmativamente en general y en particular, acompañando al bloque de la Alianza.

No aspiramos a un crecimiento como fue el de los años 90, que indujo la concentración de la riqueza en pocas manos. Queremos reconstruir un Estado activo, con políticas activas. Apuntamos al crecimiento con una política de mejora de las economías regiona-

les, mejora de las pymes y mejora del desarrollo productivo.

7

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA OCAÑA

Opinión de la señora diputada acerca del proyecto del ley sobre fomento para la micro, pequeña y mediana empresa

Durante más de 10 años, las pequeñas y medianas empresas han debido enfrentar un contexto económico fuertemente adverso. Las profundas transformaciones que experimentó nuestra economía en la última década se realizaron sin contemplar ni los tiempos ni las necesidades de las pymes.

Como consecuencia de ello, una inmensa cantidad de empresas han debido bajar sus persianas, muchos sectores productivos han desaparecido, se ha agudizado la crisis de las economías regionales. Desde luego, este proceso ha impactado negativamente en la estructura económica, produciendo el perjudicial incremento de la concentración económica y regional y la elevada tasa de desempleo que hoy sufrimos.

Las causas de este contexto adverso las podemos encontrar en la apertura sin gradualismo, los problemas de fiscalización y control de la Aduana, el incremento de la presión impositiva, la ampliación de los regímenes de retenciones y percepciones, las constantes demoras en la devolución de los créditos fiscales y los altos costos financieros. Estos elementos les restaron, sin duda, mercado y capital de trabajo.

Las pequeñas y medianas empresas durante años han debido competir contra el desleal comportamiento de quienes ingresan mercaderías en condiciones de dumping y subfacturación. Han debido producir con costos de servicios desproporcionadamente elevados para la rentabilidad empresarial. No han tenido posibilidad de acceder al mercado de capitales o al crédito o lo han tenido que hacer en condiciones desfavorables, siendo objeto de toda una serie de abusos. De esta forma, estas empresas han debido ceder su escasa rentabilidad descontando cheques o facturas a tasas exorbitantes dada la imposibilidad de obtener crédito en condiciones más competitivas.

Tampoco existió por parte del Estado ninguna acción efectiva para atenuar o corregir las serias diferencias que se han generado como consecuencia de la entrada de grandes compañías multinacionales al mercado interno. El vertiginoso cambio en las condiciones de competencia como el desentendimiento por parte del Estado de sus responsabilidades, impidieron que este segmento de empresas se adecuara a las exigencias de una competencia crecientemente globalizada.

La ideología del mercado fue la excusa teórica que se esgrimió desde el Estado para dejar a las peque-

ñas y medianas empresas a su suerte. Lamentablemente, estos "teóricos del mercado" no han querido reconocer que nuestras empresas tenían costos financieros elevadísimos y una estructura impositiva que las discriminaba.

Los programas específicos, que en los últimos años fueron más que nada anuncios, se caracterizaron por la escasez de recursos asignados, la carencia de apoyo político y la ineficacia en su administración. La existencia de defecto en su diseño o en su implementación llevaron a que el efecto fuese muy modesto o inexistente.

Ante este preocupante escenario, el gobierno de la Alianza ha puesto en marcha una serie de medidas que tienden a actuar en la dirección necesaria para revertir la situación que caracterizó a la última década. Precisamente, el proyecto de ley que estamos considerando permitirá a este sector salir adelante.

Este proyecto de ley ataca el problema del acceso al crédito desde sus dos frentes fundamentales. Por un lado, se formaliza y se le da un carácter estable a la bonificación de tasas. Esto se acompaña con la implementación de una serie de criterios y restricciones que permitirán asegurar que estas líneas de crédito de tasa reducida efectivamente benefician a las empresas pequeñas y medianas y no al sector bancario y financiero.

Por otro lado, se crea el Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que permitirá ampliar el universo de empresas que accedan al crédito gracias a que brindará garantías y respaldará el desempeño de las Sociedades de Garantías Recíprocas.

También se implementará una serie de modificaciones al régimen de las SGR a fin de librarlas de los obstáculos que han trabado su desarrollo desde su creación misma.

Un elemento novedoso para la economía argentina, pero probado con éxito por los países desarrollados, es el Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. A través de este fondo, se busca generar un adecuado financiamiento para nuevos emprendimientos, apoyo hasta hoy inexistente y que seguramente permitirá fortalecer el nacimiento de nuevas empresas a lo largo de todo el país.

También este proyecto da cuenta de otros de los problemas de los pequeños y medianos empresarios: el achicamiento del mercado que se ha evidenciado durante los últimos años. En tal sentido, la modificación en el régimen de compras del Estado va a servir para que muchas más pymes provean al sector público de bienes y servicios. Por este medio, los impuestos volverán a las empresas incrementando el nivel de actividad y empleo y, por ende, aumentando genuinamente la recaudación.

El proyecto en trámite estimula el empleo calificado gracias a la ampliación de los montos comprendidos dentro del crédito fiscal para capacitación.

Se modifica la ley de cheques a fin de evitar que las pymes se vean excluidas del sistema financiero y deban operar en la informalidad.

El carácter federal y equitativo de la ley queda plasmado en la creación de la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Productivo, a través de las cuales se asegurará que los programas de estímulo y asistencia de la Secretaría pymes lleguen a los desamortados más allá de su tamaño o ubicación.

Asimismo, se crea el Consejo Federal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas donde estarán representadas todas las provincias.

Finalmente, el Parlamento, a través de la Comisión Bicameral de Seguimiento, tendrá una vía efectiva de controlar y exigir el cumplimiento de los objetivos y metas enunciados.

Desde luego, una década adversa para las pequeñas y medianas empresas no puede revertirse en un par de meses. Sin embargo, lo que sí nos reclamamos con justicia es que hagamos efectivo el compromiso que hemos asumido durante la campaña todos los partidos políticos: apoyar a nuestras pymes.

Este reclamo no distingue partidos, ya que ante el estado generalizado de crisis y el avanzado deterioro del aparato productivo nacional, los diferentes sectores políticos han comprendido el papel de las pymes en la economía y han manifestado un compromiso con su recuperación.

Esta ley generará acciones concretas que materialicen el cambio de rumbo y comenzará a construir un nuevo contexto, favorable a la producción y a la generación de empleo.

El desarrollo de la pequeña y mediana empresa es necesario para asegurar un crecimiento sostenido y sustentable en el tiempo, un crecimiento que garantice mayores niveles de equidad social e integración regional.

Con este proyecto estamos generando los instrumentos y el marco jurídico adecuado para revitalizar un sector que en el mundo es sinónimo de empleo e igualdad de oportunidades.

8

INSERCIÓN SOLICITADA POR LA SEÑORA DIPUTADA CURLETTI DE WAJSFELD

Opinión de la señora diputada acerca del proyecto de ley sobre fomento para la micro, pequeña y mediana empresa

Desde la óptica de tratar distinto lo que es diferente, vengo a proponer que en orden al proyecto de ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa se incorporen especificidades en cuanto a la definición de aquellas que, por estar en regiones que registran marcadas asimetrías, presentan características cualitativas que demandan políticas especiales en relación con la asistencia del Estado.

Estas políticas deben dirigirse en dos sentidos: en el de corregir los factores endógenos que las afectan y en el de favorecer, mediante mecanismos macroeconómicos, la posibilidad de su fomento y permanencia en un mercado ampliado.

La disidencia parcial que ha manifestado se relaciona con la necesidad de incorporar:

a) Aspectos que bonifiquen especialmente a las mipymes radicadas en provincias que hayan soportado, como consecuencia de factores adversos (clima, depresión de precios, catástrofes), una pérdida del 30 por ciento en la producción base.

b) Beneficios para aquellas que no hayan sido favorecidas por regímenes especiales de diverso origen (desgravaciones, exenciones).

c) Privilegio con la asignación de un tratamiento especial en orden a créditos como a los de carácter impositivo para casos de consecuencia o coincidencia de una o más contingencias.

Se solicita, además, un tratamiento especial por parte de la AFIP para regularizar la situación de las mipymes considerando plazos y moratorias para inscripciones y/o registraciones, concediendo un plazo de dieciocho meses para proceder a la inscripción obligatoria. Asimismo, se requiere incorporar un tratamiento especial para mipymes a crecientes y que tengan como titulares a jóvenes y mujeres jefas de hogar.

Para concluir con las precisiones particulares, quiero señalar que este proyecto de ley debe ser considerado en un contexto de crisis general y que contribuirá, con los aportes que incorpore esta asamblea, a que las mipymes que contribuyan realmente al crecimiento por el valor agregado —especialmente en cuanto a mano de obra—, puedan seguir vigentes.

Por lo expuesto precedentemente, manifiesto mi voto afirmativo al proyecto de ley en consideración.

9

INSERCIÓN SOLICITADA POR EL SEÑOR
DIPUTADO CORCHUELO BLASCO

**Opinión del señor diputado acerca del proyecto
de ley sobre fomento para la micro, pequeña
y mediana empresa**

El proyecto debería ser un inductor al mejoramiento y fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, y el rol que ocupe esta nueva ley debería acompañar al desarrollo regional y provincial de nuestro país. Por ello, considero, y la propuesta de nuestro bloque Justicialista así lo hace explícita, que el Fonapyme y el Fogapyme deberá ser un fondo que promueva la distribución equitativa para la financiación de proyectos y la facilitación de créditos financieros en todo el territorio nacional.

En el año 1998 he presentado por expediente 3.371-D-98 un proyecto de mi autoría, presentado

originalmente en 1997, y que elaborara junto al ingeniero Rubén Bambaci, jefe de asesores de mi despacho legislativo, y del licenciado Raúl Villalón, asesor, mediante el que se proponía la creación del Servicio Argentino de Promoción y Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (SAPYME). En el mismo, con un trabajo permanente en foros intra-Cámara baja y en foros externos de discusión y análisis, elaborábamos una estrategia que consideramos valiosa para la prosecución de los fines que este proyecto que se aprueba hoy también busca. Lamentablemente, en los períodos legislativos anteriores no tuvo aprobación por parte de este honorable cuerpo.

En el presente proyecto en su artículo 14 se norma sobre el funcionamiento de foros provinciales para el asesoramiento, organización y fomento de las micros, pequeñas y medianas empresas en el marco de las áreas económica, social, tecnológica, educacional, cultural como así también ecológica. Estas agencias regionales deberán ser centros de información para que al pequeño y mediano empresario se le facilite realizar contactos empresariales y encontrar información sobre el desarrollo de este sector, así como también obtener noticias sobre licitaciones tanto públicas como privadas. Por ello creemos que la implementación de los foros de asesoramiento, como parte de la red de agencias nacionales descritas por el proyecto y avaladas por la ley 24.467, constituirán un valioso complemento al desarrollo regional de las pymes.

Asimismo, anotamos que la actual crisis de las pequeñas y medianas empresas también tiene como alta causal su falta de competitividad, más notable ante la realidad de la nueva economía, globalizada.

Por lo tanto, es dable esperar y hacemos votos por ello, que este sector logre concretar sus objetivos y aumentar el rango competitivo, porque el beneficio de las pymes es sinónimo de beneficio para todo el país.

De la misma manera debo remarcar especialmente el rol que debe cumplir el PEN, a través de sus ministerios y secretarías, como coordinador de las actividades y/o programas para lograr el desarrollo de las pymes.

En nuestro país se encuentran instaladas aproximadamente un millón de empresas del sector, que emplean el 67 por ciento del total de la fuerza laboral nacional, evidencia que convence para fortalecer fomento y apoyo al desarrollo de las pymes, con políticas y determinaciones activas por parte del Estado nacional.

Esto contribuirá en gran medida a combatir la desocupación, mediando aumento de productividad, competitividad, inversión, desarrollo tecnológico, inversión, fomento del crédito, etcétera.

Por otro lado, agregamos que la aplicabilidad del Fonapyme y del Fogapyme, y con la destinación de recursos a través del Consejo Federal de Inversio-

nes (CFI), debería tomar modelos de aplicación tales como el Sebrae en la República Federativa del Brasil, con amplia y extensa trayectoria sobre la temática, destinado a financiar proyectos que abarquen la modernización tecnológica, programas de capacitación para el personal e información de oportunidades de negocios para las pymes en todo el territorio nacional brasileiro.

Nuestra presentación del proyecto SAPYME, explicitado más arriba, tomaba algunos aspectos relevantes de la experiencia del país hermano, a efectos de ayudar a lograr un desarrollo de las pymes comparables a los países con importantes avances en el tema.

Por otro lado, considero apropiado que dentro del Consejo Federal de las Pequeñas y Medianas Empresas se incluya la cooperación y la opinión de cada municipio en los proyectos que sean financiados tanto por el Fonapyme como el Fogapyme, puesto que la participación de estas instituciones, células básicas de la democracia en contacto íntimo con la comunidad, es de vital importancia para el desarrollo de las empresas.

Finalmente, estimo necesario que se pueda establecer un control en el manejo de los fondos que reciban las provincias del Fonapyme y Fogapyme, como así también el destino que las empresas le dan a estos fondos. De la misma manera se debería tener en cuenta la dificultad que tienen las

pymes en el acceso al crédito financiero, ya que sólo el 8 % de las empresas del sector alcanzan el mismo. Proponemos la creación de auditorías con protagonismo y actividad de los estados provinciales, que controlen el manejo efectivo del dinero. Creemos que si bien el Fogapyme es un elemento importante para el acceso al crédito, no es una herramienta suficientemente fuerte para solventar las demandas del sector.

Las pymes son el motor de la economía en cualquier país del mundo desarrollado. Generan empleos, incluyen muchas personas en el circuito económico, abren mercados innovadores y contribuyen de manera contundente al P.B.I. La consigna del siglo XXI es que, cada día más, la riqueza de un país depende menos de sus gobernantes que de sus empresarios, especialmente pymes. Y un país que no tenga empresarios que hagan buenos negocios, va a ser reposicionado por otro país que sí los tenga. Si ello es así, será el país quien pagará los costos sociales que genera la falta de trabajo.

De allí, y terminando, más allá de algunas otras consideraciones ya expresadas desde largo tiempo atrás y que hubieran posibilitado mejores proyecciones prácticas a la ley, esperanzado espero la aplicación inmediata de las posibilidades que ahora estamos aprobando y comprometiendo el trabajo para seguir complementando y mejorando la norma.